

“Pretenden hundirme.” Esa fue la primera reacción pública de Augusto Pinochet, un día después de la histórica resolución dictada el lunes 29 por el juez Juan Guzmán, ordenando el procesamiento y arresto domiciliario del exdictador (1973-90) y excomandante en jefe del ejército (1973-1998).

¿El juicio final?

GUSTAVO GONZÁLEZ

Desde Santiago de Chile

“ESTOY CONSCIENTE DE que mis opositores no van a descansar hasta hundirme, pero estoy tranquilo”, dijo Pinochet el martes a un equipo del canal privado TV Megavisión en su quinta de descanso de Los Boldos en Bucalemu, unos 80 kilómetros al oeste de Santiago, el mismo lugar donde el miércoles fue notificado judicialmente del auto de procesamiento, bajo cargos de secuestro de 18 prisioneros políticos y de homicidio de otros 57. En otro gesto simbólico, sin ningún efecto práctico, el octogenario se negó a firmar el acta de notificación.

El martes las pantallas de televisión mostraron al exdictador mientras paseaba por los jardines de la residencia, apoyado en su bastón, en compañía de una enfermera y de los infaltables guardaespaldas. Pinochet se vio lúcido y en una condición física normal para un hombre de 85 años. Su imagen fue un virtual desmentido a su hija mayor, Lucía Pinochet Hiriart, quien había afirmado el día anterior que la salud de su padre iba en creciente deterioro y que incluso estaba sordo.

“Responsabilizo al juez Guzmán de la vida de mi padre”, declaró Lucía el mismo lunes, y su hermano menor, Marco Antonio, lo reiteró el martes. Ambos y otros dos hijos del exdictador —Augusto y Jacqueline— se dieron cita ese día en Los Boldos para conmemorar, en un encuentro familiar al que accedieron sólo unos pocos de los íntimos del desafortunado senador vitalicio, el aniversario número 57 del matrimonio Pinochet-Hiriart.

Unos 600 pinochetistas llegaron esa misma jornada hasta Bucalemu y se apostaron ante las rejas de la residencia para manifestarle su respaldo al exdictador. Desde Santiago arribaron en un centenar de automóviles y siete ómnibus contratados por la Fundación Pinochet.

TRANQUILIDAD MILITAR. La demostración convocó al pinochetismo duro y rememoró los actos organizados con frecuencia en la Fundación Pinochet durante los 503 días que el general estuvo arrestado en Londres. Pero hubo una diferencia sustancial: mientras en las manifestaciones de entonces abundaban los gritos e insultos contra el juez español Baltasar Garzón, los miembros de la Cámara de los Lorea, y dirigentes de izquierda y organismos humanitarios, ahora uno de los blancos privilegiados de los improperios fue nada menos que el general Ricardo Izurieta, el actual comandante en jefe del ejército, vilipendiado por los seguidores del exdictador



en un mismo nivel que el juez Guzmán y el presidente Ricardo Lagos.

Para los fanáticos del pinochetismo resulta inadmisibles que Izurieta se haya negado el lunes a emitir declaraciones contra la decisión del juez Guzmán. El general se limitó ese día a manifestar la preocupación del ejército por la salud de su excomandante y a insistir en que sus enfermedades debieron constituir causal para un inmediato sobreseimiento judicial. Al mismo tiempo, Izurieta demandó respeto para Pinochet ante “declaraciones ofensivas” hechas ese día por “determinadas personas”, en una alusión a los abogados querrelantes y dirigentes de derechos humanos como Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD).

Quienes esperaban una reacción fuerte de los militares, expresada en un ataque frontal contra Guzmán y su resolución, o mediante señales de descontento como reuniones de emergencia de los altos mandos o acuartelamientos de tropas, se vieron frustrados. Izurieta se mantuvo dentro de los límites de la institucionalidad, absteniéndose de interferir en las resoluciones de los tribunales.

Por eso los gritos contra el actual comandante en jefe del ejército en Bucalemu, que se repitieron el miércoles, cuando un grupo de adherentes al exdictador, sobre todo mujeres, se concentró frente al edificio de las fuerzas armadas con retratos de Pinochet. “Izurieta, traidor, entregaste al senador”, “Izurieta, Izurieta, que el ejér-

cito se meta”, fueron las consignas voceadas. Las reacciones de furia no tuvieron impactos ostensibles en las filas militares y en la capital se hacía trascender desde el palacio de La Moneda que el gobierno tenía “una buena evaluación” de la actitud de Izurieta.

LAVÍN SE DESMARCA. A falta de apoyo de La Moneda, uno de los más significativos respaldos al magistrado provino del dirigente natural de la oposición derechista. El excandidato presidencial y actual alcalde de Santiago-Centro, Joaquín Lavín, calificó de “serio y honesto” el trabajo de Guzmán y llamó a respetar todas las formas que indica la ley en este caso.

“Hay que dejar que la justicia siga trabajando tranquila”, subrayó el alcalde. “Personalmente, pienso que el juez Guzmán ha tratado verdaderamente de hacer justicia”, añadió, antes de precisar que no está en sus planes visitar al exdictador en Los Boldos, como lo han hecho varios dirigentes de derecha, incluyendo a una delegación de parlamentarios de su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Lavín persevera así en la estrategia que tan buenos dividendos electorales le dio en la contienda presidencial de diciembre de 1999, cuando obligó a Lagos a competir con él en una segunda vuelta.

El dirigente de la derecha proclama que para él es más importante dedicarse de lleno a su labor municipal que visitar a Pinochet. Una posición que encierra el propósito de

“bajar el perfil” al tema de los derechos humanos y proyectar una visión de futuro, desprendiéndose del pasado pinochetista de la UDI.

Un connotado integrante de la “familia militar” increpó públicamente a Lavín por su posición ante el caso Pinochet. El general retirado Hernán Núñez, excomandante de división, señaló tras visitar al exdictador en Los Boldos que “el señor Lavín, que sirvió en el gobierno de mi general, no puede tener una actitud tibia respecto al comandante en jefe del ejército”, fórmula con la cual no aludió a Izurieta, sino a Pinochet. Nostálgico del pasado, Núñez advirtió que la reacción del ejército ante el procesamiento habría sido muy diferente hace cuatro años.

ASTILLA DEL MISMO PALO.

Como un general solitario en su laberinto, Pinochet advierte que ya no tiene el apoyo ciego, aunque sí un respaldo institucional del ejército, y que tampoco la “nueva derecha”, encarnada por Lavín, está dispuesta a jugarse por él. Le queda, no obstante, la fidelidad de quienes fueron sus compañeros en el alto mando durante los 25 años en que comandó aquella fuerza. Son los generales retirados, como Luis Cortés Villa, Guillermo Garrín, el propio Núñez y el coronel Cristián Labbé (actual alcalde del municipio de Providencia en Santiago), quienes encabezan esta virtual cofradía, cuyo mensaje permanente es que Pinochet, “el hombre que salvó a Chile del comunismo”, es víctima de un juicio político que refleja la venganza de la izquierda.

El pinochetismo duro convoca igualmente a un núcleo de empresarios de extrema derecha, agradecidos al fin de los frutos que le reportó la dictadura, que hoy constituyen el soporte financiero de la Fundación Pinochet e influyen sobre las actuales cúpulas del sector privado.

Los resabios del nacionalismo de los años setenta, representados por el exjefe del grupo filofascista Patria y Libertad, hoy abogado de Pinochet, Pablo Rodríguez, son el tercer componente del entorno fiel al exdictador.

Y desde ya, los generales retirados proclaman que impedirán que Pinochet sea objeto en Los Boldos del “vejatorio” trámite de filiación (toma de huellas dactilares), que por ley corresponde aplicar a todo procesado.

El equipo jurídico de defensores del exdictador saca cuentas sobre los medios más adecuados para revertir el enjuiciamiento.

Lo más probable es que aguarden hasta marzo para presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones, ya que ese mes se renovará la quinta sala de ese tribunal, que quedará integrada por los jueces Rubén Ballesteros, Sergio Valenzuela y el propio Juan Guzmán. Ballesteros y Valenzuela votaron contra el desafuero de Pinochet, mientras Guzmán deberá inhabilitarse de participar en la vista del esperado recurso.

En cualquier caso, la batalla judicial que queda por delante será larga. Querrelantes y defensores de Pinochet recurrirán una y otra vez a recursos y apelaciones hasta que el auto de procesamiento llegue a la

Corte Suprema de Justicia, la misma que el 8 de agosto de 2000 privó de sus fueros como senador vitalicio al exdictador con la contundente votación de 14 votos contra seis.

A contrapelo de los reclamos de los pinochetistas contra un supuesto juicio político inspirado por afanes de venganza de comunistas y socialistas, lo cierto es que quienes en definitiva hundieron a Pinochet —para usar su misma expresión— fueron oficiales retirados del ejército.

La resolución de 18 fojas del juez Guzmán muestra que para el magistrado las principales pruebas de la responsabilidad de Pinochet en los crímenes de la “caravana de la muerte” fueron aportadas por los testimonios del general retirado Joaquín Lagos, comandante en 1973 de la Primera División del Ejército con sede en Antofagasta (1.200 kilómetros al norte de Santiago), y el coronel Eugenio Rivera, comandante del Regimiento de Infantería de Calama, de la misma circunscripción militar.

Lagos y Rivera demostraron que el general Sergio Arellano, jefe de la “caravana”, actuó en todo momento como oficial delegado de Pinochet, sin rendir cuenta a nadie de sus actos sino al entonces flamante dictador.

Lagos informó personalmente en octubre de 1973 a Pinochet sobre los fusilamientos ilegales de presos políticos cometidos por Arellano y sus hombres, pero el entonces comandante en jefe del ejército no sólo de-soyó sus denuncias, sino que además lo obligó a omitir el nombre de su oficial delegado en un informe sobre las 57 muertes cometidas en la zona por la misión militar.

Como se sabe, Arellano fue recompensado con el ascenso a comandante de la Segunda División del Ejército, la más importante de Chile, con sede en Santiago. Lagos fue destituido de la comandancia de la Primera División en febrero de 1974 y ocho meses después forzado a pasar a retiro. Rivera corrió una suerte similar.

El martes 23 de enero, en su comparecencia ante el juez Guzmán, Pinochet se declaró inocente y sostuvo que los únicos que tenían control sobre los 79 prisioneros políticos víctimas de la “caravana de la muerte” eran los jefes de las respectivas guarniciones militares. Es decir, Lagos y Rivera, entre otros.

Para la abogada Carmen Hertz, acusadora de Pinochet y viuda del abogado y periodista Carlos Berger, una de las víctimas de Calama, ese planteamiento de Pinochet al magistrado fue “patético”, ya que “implica un rasgo de cobardía moral para asumir lo que hizo”.

El exgobernante, dijo la abogada, ha tenido una actitud constante de eludir la justicia, “utilizando subterfugios que son patéticos en una persona que fue el dictador supremo de este país”. ■